

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 29 JUL 2019

INTERLOCUTORIO NRO. _____

MAGISTRADA PONENTE: RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-006-2019-00057-01
EJECUTANTE:	MYRIAM AMPARO CUERO BORRERO
EJECUTADO:	MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
ASUNTO	RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta No. _____).

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resolverá el recurso de apelación propuesto por la parte ejecutante, contra el auto interlocutorio No. 503 del 24 de julio de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, que repuso para modificar parcialmente el mandamiento de pago.

II. ANTECEDENTES

La señora Myriam Amparo Cuero Borrero, a través de apoderado judicial, presentó proceso ejecutivo contra el **MUNICIPIO DE JAMUNDÍ**, solicitó librar mandamiento de pago a su favor, con fundamento en la sentencias proferidas en el proceso ordinario con radicación 76001-33-31-006-2006-00050-00.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 212 del 04 de abril de 2019, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, libró el mandamiento de pago¹, el cual fue recurrido por la parte actora² quien allegó con el recurso de reposición el nombramiento provisional de la demandante.

Mediante auto interlocutorio nro. 503 del 24 de julio de 2019 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali, repuso la providencia anterior y la modificó en el numeral primero y realizó la liquidación de los valores por los cuales se debía librar el mandamiento y reconoció intereses moratorios únicamente respecto de la suma \$9.627.371 por concepto de prestaciones sociales, se libró mandamiento también por la sanción moratoria quedando exceptuado los intereses moratorios por este último concepto.

¹ Folios 145 -147

² Folios 150-152

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte apelante en síntesis que, debe dictarse mandamiento de pago tanto por los intereses moratorios sobre las prestaciones sociales como por los intereses moratorios la sanción moratoria.

“El aspecto del cual se disiente versa en cuanto al hecho de negar el mandamiento de pago frente a los intereses moratorios de la sanción moratoria, lo que a juicio del ejecutante sí es legítimo y procedente por las consideraciones que se pasan a exponerse

La razón aducida por el auto recurrido para negar dicha pretensión fue el indicar que “se estaría generando una doble sanción”, lo cual realmente no es cierto y para entenderlo, esencial es destacar que la causa de la sanción moratoria es una distinta de la que da lugar a los intereses moratorios, y además tienen origen en normas diferentes, las que no son incompatibles, si no complementarias.

En efecto la sanción moratoria constituye, como su propio nombre lo ilustra “una sanción” es decir una consecuencia punitiva o sancionatoria de carácter pecuniario, cuya forma de cuantificación la regula la misma norma que la contempla, a razón de un día de salario del empleado por cada día de omisión en el pago de las cesantías del trabajador. Esa sanción le fue impuesta al aquí demandado, por las sentencias que son base del título ejecutivo.

Por otro lado, el artículo 177 del CCA, aplicable ultractivamente en el presente caso, estableció que **“las cantidades liquidas reconocidas en las sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término”**. Es así como al ser impuesta la sanción en la sentencia, que es el título ejecutivo, ello configura la base de la obligación a la cual se le condenó y al ser una cantidad liquida de dinero reconocida en la sentencia, conforme el citado art 177 dicho capital devengará intereses moratorios después de los seis meses de proferido el fallo sin que su pago se haya realizado.

Entonces, una es la sanción por el no pago de las cesantías y que consiste en pagar un día de salario por cada día de omisión de ese pago, y otro es el concepto de los intereses por la mora en el pago de esa sanción, y que son previstos en el artículo 177 del CCA

Por otra parte, el juzgado en el auto impugnado se ocupó de realizar una liquidación, que a su juicio correspondería a la “liquidación de la sanción moratoria” señalando fechas de inicio y de culminación, así como valores específicos, procedimiento que no corresponde a la fase del mandamiento de pago, si no que se ubica en el estadio procesal de la liquidación del crédito, de manera que el a quo se anticipa incorrectamente a liquidar el crédito, lo que es una actuación propia de un momento procesal posterior. Así lo dice el Consejo de Estado al señalar que: “ Por tanto, en la oportunidad para librar el mandamiento de pago no se puede efectuar la liquidación de la condena y luego librar mandamiento ejecutivo porque



para ese efecto, pues la ley ha previsto las etapas que tienen las partes para liquidar el crédito que no son otras que las previstas en el artículo 446 del Código General del Proceso” Consejo de Estado Sección Segunda Sentencia 01301233100020080066902 (06632014) 8/6/2015 C.P. Sandra Lisset Ibarra.

(...)

Es así que en el presente caso corresponde librar mandamiento de pago por todos los conceptos postulados en la demanda, y su liquidación se habrá de efectuar en el momento procesal respectivo, y no anticiparse al incluirla en el mandamiento de pago. Los intereses son accesorios a los principal – prestaciones sociales y sanción moratoria – que es lo que se condenó en las sentencias base del recaudo ejecutivo.”

V. CONSIDERACIONES:

5.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Se debe confirmar o revocar la decisión del juez de primera instancia que se mantenga el mandamiento de pago por los conceptos de las prestaciones sociales a que se alude en las sentencias base de ejecución?
- ¿Que se mantenga el mandamiento de pago por el concepto de la sanción moratoria, cuya liquidación se deberá definir en la etapa procesal respectiva?
- ¿Se debe librar mandamiento de pago por los intereses moratorios por el no pago de la sanción moratoria?
- ¿Se debe aclarar que los montos deben liquidarse en la etapa procesal respectiva o se pueden liquidar al inicio de la ejecución?

5.2. TESIS

Se confirmará la providencia apelada, por las razones expuestas en ésta providencia, toda vez que el a-quo realiza una liquidación anticipada con el fin de tener claridad en cuanto a los valores adeudados no solo para definir la competencia basado en el factor de la cuantía sino también para definir el límite de la cuantía en caso de medida cautelar. Es de tener en cuenta que el título ejecutivo del cual deviene el proceso es un título complejo que no solo requiere de la ejecutoriedad de los fallos emitidos en el proceso sino que debe ajustarse a los postulados con que debe contar el del título ejecutivo, es decir, que sea claro, expreso y exigible.

Sin embargo, revisadas las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que aunado a lo anterior, no se aportó con la demanda la Resolución de nombramiento y posesión de la parte demandante, la cual fue allegada al proceso posterior a librarse el primer mandamiento de pago, y tampoco se allegó la resolución de liquidación de las prestaciones sociales adeudadas a la demandante por parte de la entidad demandada.

Es de aclarar que la apelación versa sobre dichos valores liquidados por el Juzgado de origen, los cuales a consideración del apoderado judicial de la parte actora solo deberían liquidarse en el momento procesal oportuno.

Además que se deben incluir en el mandamiento de pago objeto de alzada los intereses que se han generado sobre la sanción moratoria, junto con los demás ítems que obran dentro del mandamiento de pago.

Para resolver el precitado problema jurídico, es pertinente realizar un recuento normativo y jurisprudencial acerca del proceso ejecutivo, los requisitos formales y sustanciales del título ejecutivo y luego aplicarla al caso concreto.

5.3. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

- **DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:**

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA³ establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP⁴ establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: **(i)** un documento que

³ Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expide el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

⁴ Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las



provenza del deudor o de su causante; **(ii) una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial;** **(iii)** las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley. (Subrayado del Despacho)

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

En cuanto a los requisitos formales, el artículo 430 del CGP dispone que *“los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declarar por el juez en la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución, según sea el caso.*

Respecto a la forma de hacer valer la ausencia de los requisitos formales del título ejecutivo, la doctrina⁵ ha dicho: *“Se trata de un punto de especial interés debido a que de forma precisa se delimitan dos campos de acción en lo que con la defensa del ejecutado concierne; el primero de ellos se refiere a los requisitos formales del título ejecutivo, es decir todo lo que atañe con la observancia de las exigencias previstas en el art. 422 del CGP. El segundo es el atinente con la defensa de fondo del demandado, o sea el cuestionamiento de la existencia total o parcial de la obligación por la cual se le ejecuta, lo que en la práctica es usual confundir y no es extraño observar que el abogado de la parte ejecutada emplea la excepción “perentoria” de inexistencia de los requisitos formales del título, ejemplo, porque la obligación no es clara, no proviene del demandado o no es exigible, lo que es un error debida a que aquí no se cuestiona la obligación en sí, si no la idoneidad del título ejecutivo”*.

Por otra parte, el Consejo de Estado – Sección Cuarta, en providencia del 31 de mayo de 2018, C.P. JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, recordó cuales son los requisitos sustanciales y formales del título ejecutivo:

“De conformidad con la jurisprudencia de esa Corporación, los requisitos sustanciales del título ejecutivo son aquellas que tienden a demostrar que las obligaciones contenidas en los documentos son claras, expresas y exigibles.

providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

⁵ LÓPEZ BLANCO, HERNÁN FABIO, “CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO! PARTE ESPECIAL, PAG. 426. DUPRE EDITORES LTDA.2018.

Por lo tanto, si la excepción se declaró probada porque el título base de recaudo no daba cuenta de obligaciones claras y exigibles, es evidente que el pronunciamiento de la autoridad judicial demandada versó sobre los requisitos sustanciales del título ejecutivo.

Siendo así, el tribunal no desconoció el artículo 430 del Código General del Proceso, pues esa norma prohíbe pronunciarse sobre los requisitos formales, que están relacionados con la autenticidad y el origen de los documentos, que pretendan hacerse valer como título ejecutivo. Si se analiza la providencia judicial cuestionada, se concluye que, para declarar probada la excepción, el tribunal no hizo un análisis de ese tipo.

Así mismo, la Sección Tercera – Subsección B, C.P: RAMIRO PAZOS GUERRERO, en providencia del 22 de julio de 2019⁶, afirmó:

“- Las características del título ejecutivo

- 1. El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil señala que pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él.*
- 2. En ese contexto, la obligación contenida en el título ejecutivo debe aparecer manifiesta en la redacción misma del título, esto es, el crédito - deuda debe estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones, por lo que la obligación debe estar determinada, ser fácilmente inteligible, entenderse en un solo sentido y no estar pendiente de un plazo o condición.*
- 3. De otra parte, el título ejecutivo puede ser: i) singular cuando la obligación está contenida o constituida por un solo documento, o ii) puede ser compleja cuando se encuentra integrada por un conjunto de documentos, por ejemplo, un contrato, junto con los certificados de disponibilidad presupuestal, las actas recibo de las obras, servicios o bienes contratados y el acta de liquidación, etc.*
- 4. Ahora, cuando el título sea complejo, se deben valorar en conjunto la totalidad de los documentos allegados junto con la demanda⁷, con miras a establecer si constituyen prueba idónea de la existencia de una obligación a favor del ejecutante.*
- 5. En cuanto a los requisitos formales, al tenor del precitado artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, el título ejecutivo debe estar contenido en documentos que den cuenta de la existencia de la obligación, los cuales deben ser auténticos y emanar del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva, de conformidad con la ley.*
- 6. En estas circunstancias, pueden ejecutarse las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles que se encuentren contenidas en un único documento –título ejecutivo singular- o aquellas que obren en varios de ellos –título ejecutivo complejo-, dichos documentos deben ser auténticos y emanar del deudor o de una providencia judicial.*

En cuanto a los requisitos sustanciales, el Consejo de Estado ha dicho:⁸

⁶ Radicación número: 23001-23-31-000-2009-00277-02 (60613)

⁷ Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta. Sentencia del 26 de febrero de 2014, dentro del expediente con radicación número: 25000-23-27-000-2011-00178-01(19250). Consejero ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

⁸ Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.



1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.
3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

A su turno, la doctrina se ha pronunciado sobre la necesidad de que el título objeto de ejecución sea claro y expreso, en los siguientes términos⁹:

“El ser expresa la obligación, implica un requisito que se puede entender mejor si analizamos etimológicamente el concepto. El vocablo expresar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso lo que es “claro, patente, especificado”,¹⁰ conceptos que aplicados al del título ejecutivo implican que se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación; de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva.”¹¹

Como complemento se exige, con redundancia, pues se acaba de ver que ser expreso conlleva la claridad, que la obligación sea clara, es decir que sus elementos constitutivos, sus alcances, emerjan con nítida perfección de la lectura misma del título ejecutivo, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al

5.4. CASO CONCRETO:

De conformidad con el artículo 328 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Consideró el apelante que, el despacho inicialmente libró mandamiento de pago a través de auto que fue objeto de recurso de reposición a efecto de corregir dicho mandamiento. El recurso fue resuelto mediante auto 503 del 25 (sic) de julio de 2019, pero al hacerlo efectúa modificaciones trascendentales que incluso varían el sentido de la decisión inicial que libraba mandamiento de pago para ahora en su lugar negar parcialmente el mandamiento de pago, pues su mandamiento solo lo emitió por el concepto de las prestaciones sociales, los intereses moratorios

⁹ Código General del Proceso, Parte Especial, Hernán Fabio López Blanco, páginas 507 y 508, DUPRÉ Editores, Bogotá D.C., 2017.

¹⁰ Real Academia Española de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 21ª ed. Madrid, 1992, págs. 661.

¹¹ Cfr. Hernando MORALES MOLINA, Curso de derecho procesal civil, Parte especial 6ª ed., Bogotá, Edit. ABC, 1973, pág. 75, quien afirma con acierto que no valen, pues, las expresiones meramente indicativas o representativas de la existencia de la obligación, ni tampoco las expresiones presuntas, salvo el caso de la confesión ficta y en éste, únicamente respecto de las preguntas asertóricas formuladas al interrogado que no compareció. Es decir, que las llamadas obligaciones implícitas, esto es, las que están incluidas en el documento (tanto en el escrito como en el documento que contiene la declaración verbal), pero sin que estén expresamente declaradas, no pueden exigirse ejecutivamente.

derivados del no pago de esas prestaciones sociales, así como respecto de las sanción moratoria, aspecto éste último frente al cual además efectúa una liquidación anticipatoria, pero a su vez y como aspecto nuevo de decisión, niega el mandamiento de pago respecto de los intereses moratorios aplicados a la sanción moratoria.

Decantando el asunto en mención es válido aclarar que el a-quo debió remitir al contador el expediente para que realice la liquidación de lo adeudado a la parte actora con el fin de dejar claridad de los montos, razón por la cual se dejará incólume la modificación respecto a los valores allí consignados por el Juez de primera instancia.

Respecto al punto de los intereses moratorios sobre la sanción moratoria, se debe decir que conforme a lo manifestado en sentencia de unificación por el Honorable Consejo de Estado en donde se indica lo siguiente:

SANCIÓN MORATORIA – Es una penalidad no un derecho laboral / SANCIÓN moratoria EN EL RÉGIMEN ANUALIZADO - Se liquida con base al salario anual que se ajusta de acuerdo al IPC / INDEXACIÓN DE LA SANCIÓN MORATORIA –Improcedencia

*En materia de sanción moratoria [es] necesario distinguir su naturaleza de la voluntad legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese panorama concluir que se trata de un derecho; pues contrario a ello, no se erige como una prerrogativa prestacional en la medida que no busca proteger al trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación laboral, sino que se instituye como una **penalidad** económica contra el empleador por su retardo en el pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor público. En tal sentido, al no tratarse de un derecho laboral, sino de una penalidad de carácter económica que sanciona la negligencia del empleador en la gestión administrativa y presupuestal para reconocer y pagar en tiempo la cesantía, no es procedente ordenar su ajuste a valor presente, pues, se trata de valores monetarios que no tienen intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo ni menos remunerarlo.(...) otro argumento que permite descartar la posibilidad de indexar la sanción moratoria, se encuentra en el régimen anualizado previsto en la Ley 50 de 1990 cuando concurren diversas anualidades de mora, en cuyo caso, según el criterio de la jurisprudencia la base para calcularla será el correspondiente al de la ocurrencia del retardo, en donde **el salario** como retribución por los servicios prestados por el trabajador necesariamente y por definición viene reajustada cada año con los índices de precios al consumidor o en su defecto, con el aumento que disponga el ejecutivo, si se trata de relaciones legales y reglamentarias.(...)En suma, la naturaleza sancionadora, el cuantioso cómputo sistemático y prolongado en el tiempo sin que implique periodicidad, y la previsión intrínseca del ajuste del salario base con el IPC, indican con toda certeza que la sanción moratoria no puede indexarse a valor presente, razón por la cual, la Sección Segunda del Consejo de Estado sentará jurisprudencia en tal sentido*

NOTA DE RELATORÍA: Corte Constitucional C-448 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero Consejo de Estado, sección Segunda, sentencias 11 de julio de 2013 Radicación 1520-14, 14 de diciembre de 2015 Radicación 1496-11; 17 de noviembre de 2016 rad 1498-14.



Conforme lo anterior y teniendo en cuenta que la indexación se constituye en uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación, tal como lo expone la Corte Constitucional

“La Corte considera que esos criterios son aplicables, mutatis mutandi, al caso de la cesantía pues, como se ha dicho, esa prestación constituye una forma de remuneración laboral, por lo cual los trabajadores tienen derecho a que éstas no pierdan su valor adquisitivo, debido a la ineficiencia de las entidades pagadoras y a los fenómenos inflacionarios. Así, en reciente decisión, esta Corporación señaló que la iliquidez temporal o los problemas presupuestales podrían eventualmente explicar algunos atrasos en la cancelación de los salarios, las pensiones o las prestaciones, pero que en ningún caso podían constituir “justificación para que sean los trabajadores quienes asuman sus costos bajo la forma de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Los anteriores criterios jurisprudenciales permiten concluir que los trabajadores no tienen por qué soportar la pérdida del poder adquisitivo de sus prestaciones y remuneraciones laborales, por lo cual los patronos públicos y privados que incurran en mora están obligados a actualizar el valor de tales prestaciones y remuneraciones.

Sin embargo, lo anterior no implica la inconstitucionalidad de la expresión final del inciso, como lo sugiere el Procurador, por cuanto la sanción moratoria prevista por la Ley 244 de 1995 no es, en sentido estricto, un mecanismo de indexación que pretenda proteger el valor adquisitivo de la cesantía sino que tiene un sentido en parte diferente, como lo muestra con claridad el sistema de cálculo del monto de la sanción, que es muy similar a la llamada figura de los salarios caídos en materia laboral. Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo”, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia. Por ello la Corte considera que las dos figuras jurídicas son semejantes pero que es necesario distinguirlas. Son parecidas pues ambas operan en caso de mora en el pago de una remuneración o prestación laboral. Pero son diversas, pues la indexación es una simple actualización de una obligación dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores debido a los fenómenos inflacionarios, mientras que la sanción moratoria impuesta por la ley 244 de 1995 busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora, y por ello su monto es en general superior a la indexación. En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no sólo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella. (...) (Negritas y subrayas fuera de texto original).



A partir de tal criterio, que no solo distingue el propósito de la indexación, sino que además la diferencia de la sanción moratoria, la Sección Segunda ha construido una línea más o menos uniforme, en cuanto a su improcedencia frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

También cabe destacar, que a través de la sentencia del 14 de diciembre de 2015¹², el Consejo de estado manifestó que «la sanción moratoria es incompatible con la indexación, toda vez que ésta no solo cubre la actualización monetaria sino que es superior, lo que determina la improcedencia de reconocer los ajustes de valor de la sanción moratoria mientras esta opere».

Así las cosas, sería del caso confirmar la providencia apelada; dejando claridad que el mandamiento de pago recae sobre el auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, vacaciones, con sus respectivos intereses y se excluye de este ítem la sanción moratoria, teniendo en cuenta también para descontarse lo que ya se hubiere cancelado.

Respecto al ítem de aclarar que tales conceptos y montos se definirán en la liquidación del crédito, se deja claridad que los valores estipulados en el mandamiento de pago fueron liquidados por el Despacho y al no ser contrarios a la norma se dejaron como fueron especificados por el a-quo, y en el momento procesal oportuno las partes podrán presentar la liquidación actualizada del crédito la cual será analizada por el Juez para su consecuente aprobación o reliquidación.

En este orden de ideas los conceptos por los cuales se libraré el mandamiento de pago recaen sobre los contenidos en las sentencias, los intereses causados por el no pago de la misma, pero sin reconocer la indexación o intereses de mora a la sanción moratoria.

La Sala confirmará la decisión de primera instancia por los argumentos planteados en la presente providencia.

En consecuencia, se;

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 503 del 24 de julio de 2019, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen, cancélense su radicación y sin costas en esta instancia¹³.

¹² Radicación 1498-14.

¹³ Proyectó: Hefer
VoBo Secretario

RADICACIÓN
Acción
Ejecutante
Ejecutado

: 2019-00057-01
: EJECUTIVO
: MYRIAM AMPARO CUERO BORRERO
: MUNICIPIO DE JAMUNDÍ



11

178 3

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

Magistrado Ponente

JHON ERICK CHAVES BRAVO

Aclaro voto.

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

QUESE



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
DEMANDANTE:	MYRIAM CUERO
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE JAMUNDI
RADICACIÓN:	76001-33-33-006-2019-00057-01

ACLARACIÓN DE VOTO.

Puesto a consideración el auto, considero necesario expresar, que si bien acompaño la decisión la misma se fundó en el tema de indexación, el cual difiere del problema planteado como es la compatibilidad entre la sanción por mora en el pago de cesantía e intereses moratorios, por ello, debo señalar que la aquiescencia para confirmar la decisión de primera instancia se basa en mi concepto que el Consejo de Estado, asimila el concepto de los intereses de mora con indexación.

En repetidas ocasiones el Consejo de Estado ha sostenido la tesis según la cual no es posible solicitar el reconocimiento de estos dos rubros debido a que comparten la misma génesis: la devaluación del dinero. Esta, fue esgrimida una vez más por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto expuesto por el Consejero Ponente Luis Fernando Álvarez, con radicado 2106 del 9 de agosto de 2012, en el que recordó que los intereses moratorios consagrados en el artículo 177 del anterior Código Contencioso Administrativo corresponden a la devaluación del dinero son incompatibles con la indexación; razón por la cual su reconocimiento es incompatible, por tanto, aplicando dicha incompatibilidad, la mora por el pago tardío de las cesantía sería incompatible con los intereses moratorios por tener similares efectos.

JHON ERICK CHAVES BRAVO.
Magistrado.